



Desarrollo económico y exclusión social Un camino sin futuro

Por Mario Saravia Aldana *

Zonas rurales: vulnerables y excluidas

Las zonas rurales han sido históricamente las poblaciones más vulnerables y excluidas del desarrollo económico nicaragüense desde la época en que el crecimiento económico fue una asignatura bajo la supervisión del Banco Mundial, a inicios de la década de 1950. Este crecimiento significó la intensificación en el cultivo de algodón, y el despale de zonas boscosas para atender las necesidades de la ganadería extensiva, en pujante crecimiento. La información disponible nos enseña

que en términos de exportaciones, la economía creció de manera significativa hasta alcanzar exportaciones por el monto de 646 millones de dólares en el año de 1978 (BCN, 1980). Sin embargo, el modelo de acumulación de capital, fomentado de manera aguda por el régimen somocista, no sirvió para que la misma reproducción del modelo fuese más allá de la caída del poder del dictador. Las contradicciones generadas a partir de un sistema profundamente desigual sólo eran sostenibles a partir del ejercicio sistemático y despiadado de la represión política y social.

Cambios históricos a favor de minorías diversas

Con el cambio de gobierno generado a partir del movimiento revolucionario, se trató de revertir el sistema de desigualdad en beneficio de lo que se conoce actualmente como derechos de las minorías, no por el hecho de encontrarse en minoría numérica, sino por tratarse de personas históricamente ubicadas por el sistema político-económico anterior en situación de desigualdad o marginación. Así, comunidades indígenas, mujeres, personas con capacidades diferentes, campesinos y obreros,

entre otros, fueron tratados con una mentalidad diferente desde los puestos de poder. Sin embargo, los cambios propuestos por el gobierno revolucionario no se concretaron en un reconocimiento automático de los derechos promulgados, pero sí evidenciaron que la lucha tenía una razón de ser, resultando imposible tratar de ocultar los avances que en materia de derechos se estaban produciendo en distintas partes del planeta, incluyendo nuestro país, cambios demandados por una ciudadanía reprimida durante décadas. No obstante, el contexto de guerra durante la década de 1980 imposibilitó seguir por la senda marcada por las normas constitucionales, en la búsqueda de una sociedad más igualitaria en términos de satisfacción de necesidades básicas.

Toma de conciencia de la desigualdad

La desigualdad social, en sus vertientes política y económica, no se corrigen por decreto, ni dependen de la supuesta buena voluntad de los apóstoles del cambio. Esta desigualdad en buena medida sólo se puede corregir mediante una inequívoca toma de conciencia por parte de gobernantes y gobernados, que en caso de persistir los efectos de la misma, tornan imposible la sostenibilidad de cualquier modelo social que se propongan. Esta conciencia debe provenir principalmente de las poblaciones oprimidas, marginadas y excluidas. Eventualmente, puede ocurrir que se generen nuevos conflictos que darán al traste con las construcciones sociales si no se hace un replanteamiento de la distribución

de derechos (entendida como acción afirmativa), o en otra versión, puede darse una absorción o asimilación de las minorías, "a favor" de las mayorías, lo que en otras palabras significa la pérdida de la identidad social y cultural, y de esta forma se contribuye plenamente al empobrecimiento de una sociedad que pueda plantear alternativas o reformas a los modelos de desarrollo económico.

Medidas económicas, dictadas y asumidas

Como muestra de lo anterior, podemos citar la indiscutible asimilación de las políticas macroeconómicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, por parte de los distintos gobiernos a partir del año 1990, políticas severamente restrictivas en materia





Retos de la inclusión

La cuestión no es nada fácil, tomando en cuenta que los más excluidos o marginados se encuentran ubicados, en su mayoría, en zonas alejadas de nuestro entorno universitario, que las políticas gubernamentales aplicadas en su momento para evitar el aumento de la brecha (plan techo, hambre cero, usura cero, etc.) son necesarias para garantizar un margen de sobrevivencia pero a un costo que excluye la posibilidad, por parte de estos mismos sectores organizados, de plantear demandas que sean más efectivas para su inclusión dentro de un sistema que los priva (especialmente en las

zonas rurales), de una educación de calidad, porque estas demandas pondrían en peligro un sistema de equilibrios sectoriales que beneficia a los grandes inversionistas nacionales y extranjeros, quienes pueden dedicar una pequeña fracción de sus ganancias, a como lo hace el gobierno con otro tipo de ingresos, para endulzar los oídos de las personas que justamente se podrían considerar marginadas o excluidas, mediante el uso de la publicidad y la propaganda. Si a lo anterior sumamos los criterios de competitividad y productividad que se manejan de forma indiscriminada, la población marginada seguirá sufriendo las consecuencias de políticas económicas y sociales profundamente alejadas de su entorno.

Referencia

- Banco Central de Nicaragua. (1980, marzo). Informe Anual 1978. Managua.

* Docente del Departamento de Ciencias Sociales

